JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL
Salento Quindío, ocho de septiembre del año dos mil veintiuno.

Procede el Despacho a resolver la solicitud de decretar la nulidad de la notificación de la demanda a los demandados y todo lo actuado que se derive de esa actuación, igualmente del auto del cuatro de junio de la presenta anualidad, por medio del cual se aceptó la reforma de la demanda, con tal como lo solicita una de las demandas, dentro del presente proceso de TITULACIÓN DE LA POSESIÓN promovido por JHON EDUARD PINILLA FRANCO, por intermedio de apoderado judicial, contra ANGIE VANESSA PINILLA CARDONA Y MICHELE JOHANA PINILLA CARDONA y personas indeterminadas, respecto del predio rural denominado LA PALMERA, ubicado en el paraje La Palmera o Canaán de esta municipalidad, con folio de matrícula inmobiliaria 280-61662 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia Quindío, por la presunta violación del Debido Proceso por la causal de indebida notificación de la demanda, consagrada en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso.

CONSIDERACIONES

Señala el memorialista, actuando en representación de la señora MICHELLE JOHANA PINILLA CARDONA, que dentro del edicto emplazatorio y la valla fijada se hace referencia a un predio con folio de matrícula inmobiliaria 280-161662, la cual corresponde a un predio distinto frente al que se pretende la titulación, pues éste corresponde y siendo el correcto el folio de matrícula inmobiliaria 280-61662, situación irregular que hace irregular el llamamiento a los demandados, presentándose una indebida notificación de la demanda; igualmente cuestiona el profesional del derecho la decisión del despacho de admitir la reforma de la demanda a pesar de haberse agotado la etapa procesal para hacerlo, estimando igual que el trámite del proceso no puede ser rituado bajo la Ley 1581 del 2012 sino bajo los lineamientos del Código General del Proceso, situaciones que estructuran la causal de nulidad alegada.

Solicitud frente a la cual la parte actora guardó silencio.

Considera el Despacho que es claro que la notificación de la demanda es una actuación procesal que permite a la contraparte ejercer su derecho de defensa y contradicción, pues al tener conocimiento de su situación de demandado podrá tener

acceso al proceso, contestar la demanda y formular las excepciones que estime pertinentes; derecho que se le ve vulnerado cuando no es vinculado debidamente al proceso en el que sus intereses se verán afectados, esta actuación se debe hacerse con riguroso respeto a las disposiciones que regulan la materia.

El debido proceso es la garantía que tienen las partes involucradas dentro de una demanda en el sentido que se le dé el trámite establecido en la ley, y que se le apliquen las normas que regulan ese caso, no es solamente respetar las formas propias de cada juicio, ni la protección solamente de la persona que se siente vencida en juicio, sino que tiene una garantía para la sociedad en el sentido de la resolución de los conflictos con el respeto de la Constitución y la Ley, y que los funcionarios judiciales resolverán esos conflictos garantizándole a los usuarios de la justicia el respeto a las formas propias de cada juicio para asegurar una pronta y cumplida justicia.

Sobre el Debido Proceso la Corte Constitucional, en la sentencia T-057 del 2004 proferida dentro del expediente T-790784, siendo magistrado ponente el doctor MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, al respecto señaló:

“.....

El artículo 29 de la Constitución Política consagró el derecho fundamental al debido proceso y determinó que éste:

“[S]e aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación al debido proceso”.

El derecho al debido proceso contiene de este modo, entre otros el derecho a la defensa, que implica la facultad de ser escuchado en un proceso en el cual se está definiendo la suerte de una controversia, pedir, aportar y controvertir pruebas, formular alegaciones e impugnar las decisiones. El debido proceso, como ya lo ha establecido esta Corporación, *“no es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento y así lo insinuó Ihering. Con este método se estaría dentro del proceso legal pero lo protegible mediante tutela es más que eso, es el proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediates, libre apreciación de la prueba, y, lo mas importante: el derecho mismo”*¹.

.....”

¹ T-280-98 reiterada entre otras en la T-621-05.

Criterio jurisprudencial que por esa corporación fue reiterado en la sentencia T-081 del 16 de febrero del 2009, expediente T-2.014.725, siendo magistrado ponente el doctor JAIME ARAÚJO RENTERÍA, plenamente aplicable al presente asunto, donde frente al Debido Proceso y el efecto de la notificación dentro del proceso señaló lo siguiente:

“....

ii) Finalidad de la figura procesal de la notificación y su relación con la anulación de las actuaciones procesales

El artículo 29 de la Constitución Política consagró el derecho fundamental al debido proceso y determinó que éste:

“[S]e aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación al debido proceso”.

El derecho al debido proceso contiene de este modo, entre otros el derecho a la defensa, que implica la facultad de ser escuchado en un proceso en el cual se está definiendo la suerte de una controversia, pedir, aportar y controvertir pruebas, formular alegaciones e impugnar las decisiones. El debido proceso, como ya lo ha establecido esta Corporación, *“no es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento y así lo insinuó Ihering. Con este método se estaría dentro del proceso legal pero lo protegible mediante tutela es más que eso, es el proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba, y, lo mas importante: el derecho mismo”¹¹².*

El derecho a la defensa debe estar garantizado en todo el proceso, y su primera garantía se encuentra en el derecho de toda persona al conocimiento de la iniciación de un proceso en su contra en virtud del principio de publicidad.

Al respecto ha dicho esta Corporación que *“el principio de publicidad de las decisiones judiciales hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, como quiera que todas las personas tienen derecho a ser informadas de la existencia de procesos o actuaciones que modifican, crean o extinguen sus derechos y obligaciones jurídicas. De hecho, sólo si se conocen las decisiones judiciales se puede ejercer el derecho de defensa... controvertir pruebas que se alleguen en su contra, ... aportar pruebas para su defensa... impugnar la sentencia condenatoria y no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”¹¹³.*

Es así parte esencial del derecho al debido proceso la facultad de ser oído, ya que en caso contrario, es decir, en caso de desarrollo de una litis en el que a una de las partes no se le brindó la posibilidad de defenderse *“sería la forma más radical de vulneración del derecho fundamental al debido proceso y de defensa”¹¹⁴.*

La notificación es un acto procesal que pretende garantizar el conocimiento acerca de la iniciación de un proceso y en general de todas las providencias que se dictan en él, de forma que se amparen los principios de publicidad y de contradicción. Con ello se busca precisamente darles a conocer a las partes e intervinientes el contenido de lo decidido y concederles de este modo la posibilidad de defender sus derechos.

La notificación, en otros términos, *“en cualquier clase de proceso, se constituye en uno de los actos de comunicación procesal de mayor efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales con el fin de dar aplicación concreta al debido proceso mediante la vinculación de aquellos a quienes concierne la decisión judicial notificada, así como que es un medio idóneo para lograr que el interesado ejercite el derecho de contradicción, planteando de manera oportuna sus defensas y excepciones. De igual manera, es un acto procesal que desarrolla el principio de seguridad jurídica, pues de él se deriva la certeza del conocimiento de las decisiones judiciales”¹¹⁵, de allí que “asuntos como la ausencia de ciertas notificaciones o las innumerables y graves irregularidades en que se pueda incurrir al momento de efectuarlas, no*

*pueden quedar sin posibilidad alguna de alegación por la persona afecta, pues un impedimento de tal naturaleza violaría su derecho fundamental al debido proceso*¹¹⁸¹.

Considerando precisamente esta posible vulneración al debido proceso, la ley prevé la medida procesal de anulación de las actuaciones surtidas con posterioridad al vicio y que resulten afectadas por éste, señalando expresamente las causales correspondientes en los diversos códigos de procedimiento, *"en tanto que lo considera un defecto sustancial grave y desproporcionado que merece protección del derecho a la defensa del demandado"*¹¹⁸¹.

En conclusión, la notificación constituye una figura esencial en los procesos judiciales, pues la finalidad de dar a conocer a una persona que sus derechos están en disputa y que tiene la facultad de ser oído en el proceso, característica que tiene mayor entidad cuando se trata del conocimiento de la primera providencia judicial (auto admisorio de la demanda o mandamiento de pago).

Del estudio del proceso, en especial del texto de la demanda y las actuaciones de emplazamiento realizadas por la parte actora, incluida la valla inicialmente instalada, emplazamiento que se efectuó bajo las reglas establecidas en el artículo 108 del Código General del Proceso, se tiene que efectivamente dentro de dichos llamamientos se hace señalamiento a un predio con folio de matrícula inmobiliaria distinto al que es objeto del proceso, y con fundamento en esos emplazamiento fue que se procedió a designar Curador Ad-Litem a la memorialista y Personas Indeterminadas, situación irregular que afecta una debida notificación de la demanda por la indebida realización del emplazamiento de los demandados, asistiéndole al razón al profesional derecho frente al cuestionamiento en ese punto realizado, por lo que habrá de rehacer esa actuación y las demás que se derivaron de ella, es decir hacer nuevamente el emplazamiento con las ritualidades del artículo 108 del Código General del Proceso, publicación del emplazamiento que se debe efectuar en el diario el Espectador o el Tiempo o La República, de amplia circulación nacional, en el día domingo, que se surtirá mediante la inclusión en un listado que se publicará por una sola vez, o en los medios masivos de comunicación RCN o CARACOL, que se deberá realizar en cualquier día de la semana entre las seis de la mañana y once de la noche, copia informal de la página o constancia de emisión o transmisión se allegará al proceso, la cual deberá contener las partes del proceso, la persona emplazada, naturaleza del proceso y el Despacho que la requiere. Cumplido el emplazamiento, la parte actora deberá enviar comunicación solicitando la inclusión dentro del Registro Nacional de Personas emplazadas, para lo correspondiente. El emplazamiento se entenderá surtido transcurridos quince (15) días después de la publicación en el Registro. Si la persona emplazada no comparece se le designará curador Ad Litem, con quien se surtirá la notificación. Debiéndose dar aplicación preferente a las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo 806 del 2020 respecto al emplazamiento de personas.

Con relación al cuestionamiento de la aceptación de la Reforma de la Demanda, no se comparte los argumentos del profesional de derecho, ateniéndose el Despacho a lo argumentado en el auto del cuatro de junio del presente año por el memorialista cuestionado, máxime que de la declaratoria de nulidad del emplazamiento de los demandados y la notificación de la demanda a ellos realizada, implica que se retrotrae la actuación a la etapa procesal de notificación y traslado de la demanda para conformar debidamente el contradictorio.

Ahora bien, como de la reforma de la demanda, se establece que el predio objeto del proceso tiene una extensión de 10 hectáreas y 5.834 metros cuadrados, variándose su extensión dado que en la demanda inicial se hacía referencia a un predio de 3 y ½ hectáreas de extensión, lo que llevó al Despacho a adecuar en su momento el trámite al Especial consagrado en la Ley 1561 del 2012, situación esta que implica que habrá de readecuarse el trámite del proceso Declarativo Verbal establecido en los artículos 368 y siguientes del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 375 del Ibídem, pero dejándose vigente las demás decisiones señaladas en el auto que calificó la demanda, dado que el mismo es similar al admisorio de la demanda establecida en la norma a aplicar, y las órdenes impartidas son iguales a las dispuestas para el trámite del proceso de pertenencia; esto con el fin de evitar mayores dilaciones del proceso y procurar por la economía procesal, situación que no afecta el debido proceso ni los derechos de las partes. Dado que el término de traslado de la demanda en la norma citada corresponde a 20 días, se dispondrá rehacer las notificaciones realizadas concediéndosele el nuevo término para contestar la demanda, ello en aras de respetarles el debido proceso.

Por lo analizado el Juzgado,

RESUELVE

PRIMERO: Dentro del presente proceso TITULACIÓN DE LA POSESIÓN promovido por JHON EDUARD PINILLA FRANCO, por intermedio de apoderado judicial, contra ANGIE VANESSA PINILLA CARDONA Y MICHELLE JOHANA PINILLA CARDONA y personas indeterminadas que crean tener algún derecho sobre el predio objeto del proceso, respecto del predio rural denominado LA PALMERA, ubicado en el paraje La Palmera o vereda Canaán de esta municipalidad, con folio de matrícula inmobiliaria 280-61662 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia Quindío, se accede parcialmente a lo solicitado por la parte demandada, por lo analizado.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se decreta la nulidad del emplazamiento de los demandados, y consecuentemente el nombramiento de Curador Ad-Litem, retrotrayéndose la actuación a la etapa procesal de la notificación y traslado de la demanda, por lo señalado.

TERCERO: Conforme a lo resuelto, la parte actora deberá nuevamente realizar el emplazamiento de los demandados, acorde con las ritualidades del artículo 108 del Código General del Proceso, publicación del emplazamiento que se debe efectuar en el diario el Espectador o el Tiempo o La República, de amplia circulación nacional, en el día domingo, que se surtirá mediante la inclusión en un listado que se publicará por una sola vez, o en los medios masivos de comunicación RCN o CARACOL, que se deberá realizar en cualquier día de la semana entre las seis de la mañana y once de la noche, copia informal de la página o constancia de emisión o transmisión se allegará al proceso, la cual deberá contener las partes del proceso, la persona emplazada, naturaleza del proceso y el Despacho que la requiere, que corresponde a los siguientes datos:

DEMANDANTE: JHON EDUARD PINILLA FRANCO
 DEMANDADOS: ANGIE VANESSA PINILLA CARDONA Y MICHELLE JOHANA PINILLA CARDONA y personas indeterminadas que crean tener algún derecho sobre el predio objeto del proceso
 PROCESO: DECLARATIVO DE PERTENENCIA respecto del predio rural denominado LA PALMERA, ubicado en el paraje La Palmera o vereda Canaán de esta municipalidad, con folio de matrícula inmobiliaria 280-61662 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia Quindío
 RADICADO: 2016-00065
 DESPACHO: JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE SALENTO QUINDÍO
 FINALIDAD: NOTIFICACIÓN AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA DEL 26-IV-19.
 EMPLAZADOS: ANGIE VANESSA PINILLA CARDONA Y LAS DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS QUE CREAN TENER ALGÚN DERECHO SOBRE EL PREDIO OBJETO DEL PROCESO.

Cumplido el emplazamiento, la parte actora deberá enviar comunicación solicitando la inclusión dentro del Registro Nacional de Personas emplazadas, para lo correspondiente. El emplazamiento se entenderá surtido transcurridos quince (15) días después de la publicación en el Registro. Si la persona emplazada no comparece se le designará curador Ad Litem, con quien se surtirá la notificación. **Lo anterior en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 806 del 2020, normas de prioritaria aplicación.**

CUARTO: Readecuar el trámite del proceso al establecido para los Declarativos Verbales regulados en el artículo 368 y siguientes del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 375 del Ibídem, quedando vigentes las demás ordenes emitidas en el auto que calificó la demanda proferido el 26 de abril del 2019, pero modificándose el término de traslado de la demanda al de 20 días, debiéndose rehacer las notificaciones ya efectuadas corriéndosele el nuevo término para contestar la demanda y su reforma, por lo analizado.

QUINTO: Quedan con validez las pruebas hasta el momento recaudadas.

SEXTO: Reconocer personería para actuar al doctor JULIO HERNAN CARDENAS LOMBANA, en nombre y representación de la señora MICHELLE JOHANA PINILLA CARDONA, acorde con el mandato conferido.

NOTIFÍQUESE.

MILLER GAITAN MARTÍNEZ
Juez

CERTIFICO: Que el auto anterior
notificó a las partes por estado de hoy

19 SEP 2011

SECRETARIO